



Conflictos sociales y ambientales en Chile

Jaimovic, Dany; González, Belén; Calbucura, Jorge; Orellana, Nicolás del Valle; Graus, Claudia Maldonado

Published in:
IBEROAMERICANA. América Latina - España - Portugal

DOI:
[10.18441/ibam.18.2018.67.205-230](https://doi.org/10.18441/ibam.18.2018.67.205-230)

Publication date:
2018

Document Version
Verlags-PDF (auch: Version of Record)

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):
Jaimovic, D., González, B., Calbucura, J., Orellana, N. D. V., & Graus, C. M. (2018). Conflictos sociales y ambientales en Chile. *IBEROAMERICANA. América Latina - España - Portugal*, 17(67), 205-230.
<https://doi.org/10.18441/ibam.18.2018.67.205-230>

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

I CONFLICTOS SOCIALES Y AMBIENTALES EN CHILE

I SOCIAL AND ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN CHILE

DANY JAIMOVICH / BELÉN GONZÁLEZ / JORGE CALBUCURA / NICOLÁS DEL VALLE ORELLANA /
CLAUDIA MALDONADO GRAUS

LOS CONFLICTOS DEL CHILE CUASI DESARROLLADO Y CUASI DEMOCRÁTICO

Hasta hace poco, Chile era el “niño modelo” en América Latina, tanto para las instituciones internacionales como para muchos analistas extranjeros. Las supuestas virtudes de un sistema económico productivo y eficiente, un aparato político funcional y de alta probidad, y una sociedad con baja conflictividad hacían que este Chile cuasi desarrollado pareciera ser un ejemplo para el resto del continente y para otras economías emergentes. Sin embargo, los recientes escándalos de corrupción de todos los sectores políticos tradicionales, el estancamiento de la productividad y el incremento de los conflictos sociales y ambientales han desnudado la fragilidad del “modelo chileno”. ¿Qué es lo que está pasando en el Chile que se encamina a cumplir treinta años desde el fin de la dictadura?

En este foro presentaremos algunas de las reflexiones que tuvieron lugar en el primer “Simposio académico: Análisis de conflictos sociales y ambientales en Chile”, realizado el 28 y 29 de septiembre de 2017 en la Universidad Goethe de Fráncfort. En este simposio, inédito en Europa, se reunieron más de veinte investigadores de diferentes disciplinas (antropología, ciencia política, economía, filosofía, sociología, etc.) para discutir estudios originales sobre

el tema. El foco del simposio fue el análisis cuantitativo y cualitativo de: (i) el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, (ii) los nuevos movimientos sociales y (iii) el impacto de la explotación de recursos naturales en las comunidades.

El estudio de los conflictos es, por definición, contencioso. Si bien entre los participantes del simposio no hubo acuerdo en muchos aspectos, una idea transversalmente aceptada fue que durante la transición autocrática-democrática chilena se generó en la sociedad una especie de “bomba de tiempo” u “olla de presión” que ha terminado por explotar en los últimos años. En este foro, Belén González describe esta “Transición sin violencia a una democracia limitada”. A partir de su experiencia en una extensa investigación de campo, relata cómo las concesiones otorgadas al saliente régimen militar en 1988 y 1989 permitieron una transición pacífica, pero en que se toleró la permanencia de una serie de “enclaves autocráticos” que han condicionado al Chile post-dictadura. Una democracia poco representativa y un Estado que se desliga de la provisión de muchos de los servicios sociales básicos fueron consentidos largamente y sin mayor conflictividad por la sociedad chilena. Esto en pos de no retornar a un régimen

autocrático y no perturbar el inicialmente exitoso modelo económico.

Uno de los primeros conflictos a los que se vieron enfrentados los gobiernos democráticos fue el reinicio del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Durante el simposio de Fráncfort presentamos *MACEDA*, la primera base de datos sistemática de eventos relacionados a este conflicto. Con estos datos es posible analizar detalladamente como ya en el gobierno de Aylwin comienzan los eventos conflictivos, y particularmente en 1992, coincidiendo con otros movimientos indígenas latinoamericanos y el V Centenario del Descubrimiento de América. Pero es en 1997 cuando el denominado “conflicto mapuche” se intensifica en cuanto a actos violentos por parte de los distintos actores involucrados. Hasta el día de hoy este es uno de los conflictos más relevantes de la sociedad chilena.

En este foro, Jorge Calbucura, académico mapuche de larga trayectoria, presenta “Más allá del horizonte colonial”, en el que describe el proceso histórico de las relaciones entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, a partir de la ocupación de La Araucanía a finales del siglo XIX, y en particular durante el régimen militar y la transición. Esta relación ha estado marcada por afrentas y violencia, pero también por acuerdos. Calbucura señala que los mapuche han ocupado “la política como estrategia de sobrevivencia”. Un aspecto relevante es que este conflicto no es solo étnico y social, sino también ambiental. Mucho antes que otros movimientos ambientales, las comunidades indígenas se manifestaron contra la construcción de la central hidroeléctrica Ralco y las empresas forestales.

Si bien el “conflicto mapuche” y las manifestaciones estudiantiles de 1997,

1999 y 2002 ya habían representado eventos relevantes, en 2006 es cuando la conflictividad social se comienza a manifestar notoriamente en la sociedad chilena. Y es la primera generación post-dictadura, los estudiantes secundarios de aquella época, los que marcan este hito a través de su “revolución de los pingüinos” en contra de un sistema escolar que poco había cambiado desde la dictadura. El mundo intelectual comenzó a buscar respuestas para entender este fenómeno y la tesis de “el malestar” en la sociedad chilena ha sido una de las más influyentes. En este foro, Nicolás del Valle expone sobre el “Malestar cultural y conflictos socio-ambientales en Chile”, revisando este debate intelectual y como éste ha variado mientras la conflictividad ha aumentado, volviéndose más visible y transversal.

Si bien los gobiernos de cada periodo habían logrado “sacarle vapor a la olla de presión”, es en 2011 cuando el estallido social se vuelve inminente, esta vez con las masivas protestas de los estudiantes universitarios y con el movimiento en contra de la construcción de represas hidroeléctricas en la Patagonia. Claudia Maldonado describe cómo es que “Algo cambió en Chile a partir del 2011”, relatando los principales sucesos de este año, los síntomas que precedieron a esta explosión social (que pocos previeron) y las consecuencias que ha traído hasta ahora. La persistente desigualdad económica y social parece haber dejado de ser algo con lo que los chilenos estén dispuestos a conformarse.

Amartya Sen, célebre economista y filósofo indio, señala que el desarrollo no es llegar a los 30.000 dólares de PIB per cápita, el desarrollo es la libertad. La libertad de poder elegir la forma en que queremos

vivir, la libertad de no vernos restringidos por carencias materiales, limitaciones políticas y degradación ambiental para poder realizarnos como personas, la libertad de alcanzar nuestro potencial. En un Chile cuasi desarrollado desde el punto de vista contable y cuasi democrático desde la mé-

trica académica internacional, los conflictos sociales y ambientales son la expresión de una sociedad que parece querer ir en busca de esta libertad.

DANY JAIMOVICH

TRANSICIÓN SIN VIOLENCIA A UNA DEMOCRACIA LIMITADA: DINÁMICAS INTERNAS DE LA TRANSICIÓN CHILENA

El pasado 19 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la primera vuelta de las séptimas elecciones presidenciales desde el retorno de la democracia en Chile. Con resultados más ajustados de los anticipado, hay altas posibilidades de que el candidato de la centro-derecha Sebastián Piñera vuelva al poder en Chile tras cuatro años de un gobierno de coalición de centro-izquierda. Los resultados de estos últimos comicios son la parte visible de una democracia en funcionamiento, demostrando que en Chile el traspaso de poder entre partidos o coaliciones de índole opuesta no interrumpe la actividad social, económica y política del país.

Sin embargo, la normalidad en el cambio de gobierno ofrece tan sólo una visión parcial del tipo de democracia en la que participa la sociedad chilena hoy. Desde el retorno a la democracia, cambios a políticas sociales y económicas de importancia han sido en general de lenta implementación y han puesto de manifiesto división y controversia política tanto a nivel político como social. Como postula Claudio Fuentes en su libro “El Pacto”, probablemente esto sea consecuencia directa de una “democracia pactada”.

Con el fin del gobierno autocrático de Augusto Pinochet, comenzaba un pe-

ríodo democrático limitado por enclaves autoritarios, los cuales han sido diseñados para preservar los intereses de aquellos que abandonaban el poder. El nuevo régimen democrático se vio en la posición de gobernar Chile evitando cambios políticos que arriesgaran un regreso al modelo autocrático. A su vez, el nuevo sistema político tenía (y tiene) la obligación de representar distintos grupos políticos y sus bases sociales en un país en donde un 44% de los más de siete millones de votantes se manifestó en contra de una transición hacia la democracia en el plebiscito de 1988.

En los últimos 27 años la política en Chile ha representado una postura *intermedia*. Satisfacer a un electorado dividido con visiones opuestas sobre el devenir político de Chile ha generado incentivos para realizar políticas sociales y económicas de poco calado y promover cambios mínimos a dichos enclaves autoritarios. El coste ha sido posponer de forma indefinida la resolución de los conflictos sociales para no despertar rivalidades políticas latentes. La intensificación de dichos conflictos sociales en la historia reciente de Chile es, en gran parte, resultado de los acuerdos labrados durante la transición política de 1988-1989.

La transición chilena

Los períodos de transición de un gobierno autocrático a uno democrático por lo general reflejan una tensa relación entre aquellos en el poder y los que pugnan por un cambio. Es un período de incertidumbre, donde decisiones políticas pueden alterar de forma rápida el precario balance entre fuerzas opuestas y potencialmente incentivar el uso de métodos de coerción con el fin de imponer un criterio político sobre otro. Según Geddes, Wright y Frantz en su artículo “Autocratic Breakdown and Regime Transitions” (2014) el 40% de este tipo de transiciones genera víctimas mortales en un último intento del gobierno autocrático de controlar la situación.

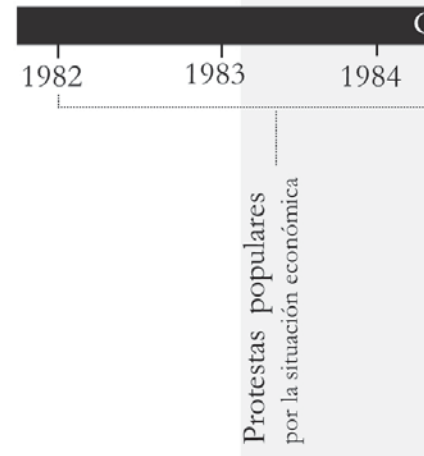
Chile pertenece al grupo de las transiciones autocracia-democracia que evitó la posible intensificación de la disputa política a un conflicto armado o el uso unilateral del aparato represivo por parte del gobierno en salida. En el caso chileno, la transición comenzó tras el plebiscito nacional sobre la continuidad del general Pinochet en el poder. El eventual apoyo al cambio de régimen activó un proceso de negociación entre el gobierno militar saliente y la oposición política. La transición pactada —como se conocen estos casos— generó una serie de concesiones al gobierno militar con el fin de garantizar la protección de sus intereses y evitar el fracaso de las negociaciones.

En Chile, el legado de las concesiones políticas que se hicieron durante el proceso de transición ha dado lugar al estudio de las relaciones cívico-militares o el impacto de los enclaves autocráticos en el devenir democrático del país. Pero, para entender el efecto que dichos legados autocráticos tienen sobre conflictos sociales actuales en

Chile, es fundamental examinar cómo la transición logró evitar una intensificación del conflicto político hacia un enfrentamiento armado teniendo en cuenta la postura antitética del gobierno militar y de la oposición y la constante presencia de métodos violentos —tanto las campañas represivas del gobierno como grupos armados de la oposición— en el marco de la transición. El gráfico 1 presenta una simplificación de los eventos que acontecieron durante ese período y que pudieron activar una confrontación más radical entre grupos armados de ambos bandos.

El riesgo de una intensificación del conflicto

Durante la década de los ochenta y en particular en la antesala del plebiscito de 1988 operaron en Chile más de treinta grupos armados. Tres de estas organizaciones —tal vez las más conocidas— pertenecen a la oposición política al régimen de general Pinochet: el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Grupo Lautaro. Sin embargo, los veintiocho grupos restantes lo hacían bajo el patrocinio o alineación política con el gobierno, tal y como se identifica en la revista *Hoy* número 543. En el gráfico 2 podemos ver cómo este tipo de movilización social de ambos bandos políticos se tradujo en un alto número de acciones violentas, tanto contra individuos como propiedades.



Transición Chilena Riesgo de conflicto violento

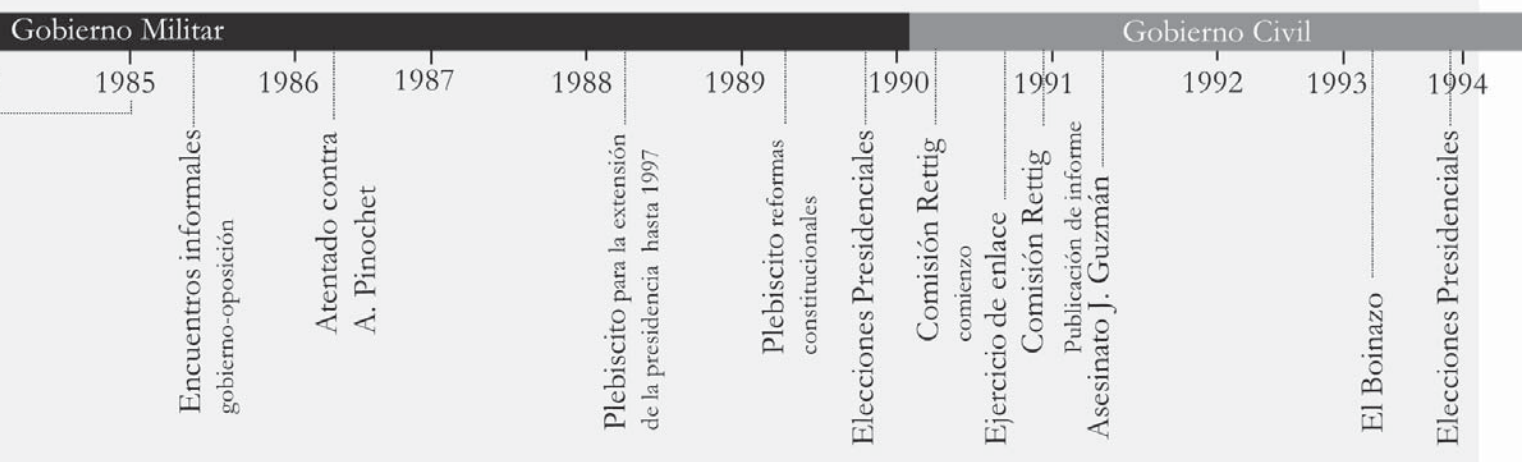


Gráfico 1 Selección de eventos de la transición chilena.

La presencia de grupos con tendencias violentas tuvo consecuencias directas sobre la transición chilena. Primero, añadió un alto nivel de inestabilidad política y social poniendo en entredicho la capacidad tanto del gobierno militar como de la oposición para controlar sus facciones internas y llegar al plebiscito de 1988 sin violencia. Segundo, ponía en peligro la transición en sí misma ya que con el comienzo de las reuniones informales entre el gobierno militar y la oposición en 1985 —como narra Ascanio Cavallo en su libro “La historia oculta de la transición”— y sobre todo con las negociaciones oficiales para la transición a la democracia tras el plebiscito de 1988, el accionar violento de dichos grupos podría haber roto el equilibrio de concesiones entre el gobierno saliente y la oposición emergente.

Sin embargo, poder controlar estos grupos durante el período 1985-1989 requería un nivel interno de cohesión entre las distintas facciones de cada bando. Esto

representó un reto sobre todo para la oposición, que no tuvo un frente común hasta la campaña para el plebiscito de 1988. De hecho el atentado del FPMR contra el general Pinochet en 1986 debilitó la postura de la oposición en las negociaciones informales y los obligó a distanciarse de las facciones más radicales a fin de no perder legitimidad política y apoyo social. Este hecho empujó a la oposición a acatar los términos de las negociaciones del gobierno militar de cara al referéndum de 1988 con el objetivo de mantener la posibilidad de una transición política abierta y evitar poner en peligro el precario equilibrio político. Incluso el asesinato de Jaime Guzmán en 1991 por parte del FPMR durante el primer gobierno democrático, supuso un duro golpe para el gobierno de Patricio Aylwin y ayudó a la saliente administración militar a destacar la necesidad de proteger sus propios intereses. Un ejemplo de esto es la creación de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, “La Oficina”, en 1993.

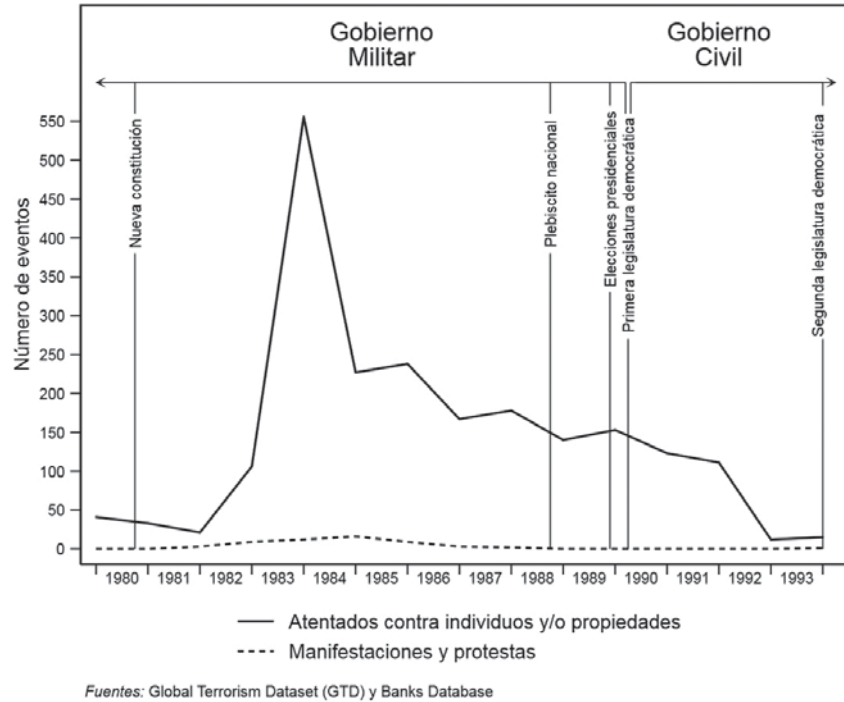


Gráfico 2 Movilización social en Chile 1980-1993.

Dinámicas internas de la transición chilena

La transición democrática en Chile estuvo condicionada por la posibilidad de una intensificación violenta del conflicto. El accionar violento de grupos alineados con el gobierno militar y la oposición así también como el precedente represivo del gobierno militar y objetivos políticos dispares entre ambos actores generó dos dinámicas internas de la transición chilena antes y después del plebiscito nacional de 1988.

En los años posteriores a las protestas del 1982-1985, el gobierno militar y parte de la oposición comenzaron una ronda de charlas informales. Esta iniciativa del sector más moderado (y liberal) de la administración militar y lo que por aquel entonces era una oposición política fragmentada culminó con la firma del do-

cumento —sin legalidad vinculante— denominado El “Acuerdo Nacional” donde convinieron los pasos a seguir tras el plebiscito de 1988. Sin embargo, llegar hasta este acuerdo no fue fácil.

Tanto el gobierno como la oposición tenían objetivos políticos diametralmente opuestos. El gobierno pretendía incrementar su legitimidad y lograr una extensión del mandato del general Pinochet con el plebiscito de 1988, mientras que el objetivo de la oposición era garantizar la transición democrática. Buscando ambos apoyo popular para obtener estos objetivos, gobierno y oposición entendieron rápidamente el beneficio estratégico y político de abstenerse del uso de violencia.

Principalmente la oposición necesitaba ganar credibilidad como alternativa al gobierno militar, lo cual en el período 1985-1988 parecía algo imposible dada su estructura descentralizada y la varia-

ción en ideologías políticas y estrategias que se congregaban bajo dicha agrupación. El atentado del FPMP contra el general Pinochet en septiembre de 1986 supuso un contrapié para los avances de la oposición y desató una nueva campaña represiva por parte del gobierno. Tras este hecho, la oposición –conocida a partir de febrero de 1988 como Concertación de Partidos por el No– decidió sistematizar la coordinación entre los distintos partidos y rompió tajantemente con facciones de accionar violento. Mientras que la oposición tuvo que aceptar los términos del gobierno para el plebiscito de 1988, su postura se vio fortalecida al presentar una organización más cohesiva y un estrategia clara de “no violencia”.

La votación de octubre de 1988 cambió el horizonte temporal del gobierno militar y de la oposición afectando el principal objetivo político del gobierno, aunque no el de la oposición. Con el reverso del plebiscito de 1988, el objetivo político se convertía en mantener la mayor cantidad de poder posible durante la democracia. En comparación con la oposición, no es del todo claro si el gobierno iba a abstenerse de usar o incentivar el uso de violencia para cohesionar a la fortalecida oposición ante la eventualidad de la transición. Las primeras elecciones presidenciales desde 1970 suponían un riesgo para las preferencias políticas del gobierno militar y daba tan solo un año como horizonte temporal a fin de forzar enclaves autocráticos que protegieran los intereses de las fuerzas armadas y sus miembros. En cambio, la oposición podía contar a partir de entonces con un horizonte temporal más extenso. Las negociaciones para la transición política no se limitaban ya a

los meses anteriores a las elecciones presidenciales de diciembre de 1989, sino que cambios necesarios podrían llevarse a cabo en futuras legislaturas democráticas. Este nuevo horizonte temporal permitió aplicar una estrategia gradualista e implementar cambios necesarios para obtener una democracia funcional a largo plazo.

La diferencia de objetivos políticos, de horizontes temporales y la posibilidad de que el gobierno militar pueda revertir el proceso de transición o de autorizar el uso de violencia estatal a fin de obtener sus objetivos políticos, no descartó la intensificación del conflicto incluso tras los resultados del plebiscito de 1988. El apoyo mayoritario en contra de la extensión en el poder del general Pinochet hasta 1997 desató una confrontación interna dentro de la Junta de Gobierno. Como narra el general Matthei –miembro de la Junta– en sus memorias *Matthei, Mi Testimonio* (2003), el general Pinochet estaba dispuesto a rechazar dicho resultado y revertir el proceso. La Concertación de Partidos por el No de hecho temía una reacción negativa e incluso violenta por parte del gobierno, pero la oposición a esta propuesta de otros miembros de la Junta de Gobierno deslegitimó dicha opción y permitió garantizar el devenir de la transición como estaba establecido en la constitución de 1980. Sin embargo, la división interna del gobierno militar en cuanto a la continuación del proceso de transición fue una llamada de atención para la oposición.

Teniendo en cuenta estos acontecimientos, la oposición estaba dispuesta a ceder a las peticiones del gobierno militar y asegurar el cambio a la democracia sin violencia. Hubo una claro *trade-off* por

parte de la oposición: era mejor aceptar las demandas del gobierno saliente que intentar imponer cambios que pudieran desestabilizar el proceso. Esta política de postergación tuvo apoyo directo por parte de la ciudadanía cuando se aprobaron reformas a la Constitución de 1980 con un referéndum en junio de 1989, obteniendo 91,25% de los votos a favor. Tanto la ciudadanía como la oposición vieron en la transición una *oportunidad única* para poder salir del régimen autocrático, especulando que el nuevo marco democrático chileno permitiría con el tiempo suavizar o incluso eliminar los enclaves autoritarios.

Más allá de la transición

Dado los antecedentes represivos del gobierno militar y oportunidad de una transición pacífica hacia la democracia, es entendible que la estrategia gradualista de cambio político para la eliminación de enclaves autocráticos haya sido predominante dentro de la oposición política. Sin embargo, con el transcurso de las legislaturas y la presión de las fuerzas armadas durante el período democrático —véase en gráfico 1 el Ejercicio de Enlace y el Boinazo—, se podría decir que en el año 1989 se subestimó cómo la capacidad de cambio político iba a colisionar con una sociedad políticamente dividida. Durante las dos primeras presidencias democráticas (Aylwin 1990-1994, Frei Ruiz-Tagle 1994-2000) aún era latente el conflicto de los enclaves autocráticos, con unas fuerzas armadas capaces de dar un golpe de mesa. Solo basta decir que Pinochet fue comandante en jefe hasta 1998 y senador vitalicio hasta 2002. Recién a par-

tir de la tercera presidencia (Lagos 2000-2006) hubo un claro distanciamiento de las fuerzas armadas de la política, pero la transformación de muchos de los enclaves autocráticos aún está por llegar.

Si bien durante la transición chilena se evitó reactivar la violencia como medio de disputa política en el marco electoral entre 1988 y 1989, la forma en que esta se llevó a cabo y la concepción de que dicha transición solo era posible con concesiones al gobierno militar saliente han tenido legados mucho más duraderos. El resultado ha sido la regularidad democrática que facilitó el distanciamiento de un posible reverso autocrático a costa de dejar de lado problemas de fondo de una sociedad aún dividida. La “lógica pragmática de la gradualidad”, como lo llama Claudio Fuentes en su libro *El Pacto*, ha implicado que hasta ahora solo se hallan realizado modificaciones superficiales a la constitución de 1980 y otros enclaves autoritarios. Un ejemplo de la continuidad de dichos enclaves es la Ley Antiterrorista de 1984, que en el período democrático se ha utilizado en varias ocasiones, especialmente en el contexto del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, uno de los primeros conflictos post-dictadura (véase Calbucura, en este volumen).

Mientras un consenso general da la transición por concluida, los enclaves autocráticos heredados de la dictadura militar aún presentan una atadura para los gobiernos democráticos y en los últimos años han estado intrínsecamente ligados a importantes conflictos sociales en Chile.

MÁS ALLÁ DEL HORIZONTE COLONIAL

En 1881 se inicia una ofensiva conjunta de los ejércitos de Chile y Argentina que comienza con un ataque a las fronteras del territorio mapuche. La invasión cercena el Wallamapu (territorio histórico mapuche); en 1883 las tropas chilenas ocupan los territorios del oeste, La Araucanía; y en 1885, los militares argentinos toman posesión del territorio del este, La Pampa.

La población vencida es confinada en reservas indígenas; es condenada a vivir en permanente situación de vulnerabilidad. La reserva indígena persigue quebrar el espíritu de cohesión comunitario, su capacidad de organizarse y autogobernarse. La política de reducción como sistema no aspira a arrancar las raíces de lo que existe; siembra raíces más fuertes que las viejas con el propósito de sustentar la matriz colonial.

No obstante esta situación compleja desde el punto de vista político, económico y social, la sociedad mapuche y sus autoridades políticas se ven obligados a crear alternativas a la medida de la situación; el encontrar estrategias que permitan su supervivencia.

La política como estrategia de sobrevivencia. En consecuencia, el ejemplo de la evolución de la élite política mapuche en torno a la formulación programática ayuda a comprender la complejidad de la política indígena en América; en particular, la relación entre política, conflictos y limitaciones del movimiento indígena. De qué forma son entramadas las visiones del poder a una nueva forma de entender la identidad en su concepción de imaginación política indígena. Desde esa pers-

pectiva, el empoderamiento político es una acción estratégica de decolonización de la imaginación de la sociedad indígena como comunidad imaginada.

La emergencia de las élites provinciales indígenas, asociada a la noción de lugar de origen, cobra especial importancia, dada su condición de subordinación racial y geopolítica. Los Estados nacionales de América Latina históricamente se constituyen como centro y periferia, donde la capital es el centro del poder estatal y la región es la periferia. Por ello es imprescindible tener en cuenta que el ser y estar en la periferia de este sistema-mundo constituye un entorno de baja dependencia cultural y, por lo tanto, baja tasa de asimilación o desindianización. De esta forma, convergen política indígena, noción de territorio, clase social y condición de minoría. Para el caso de la minoría, relaciona sentido de dignidad colectiva y poder social como el cauce para alcanzar una cohesión social interna. Así, cohesión social y empoderamiento político de la sociedad mapuche evolucionan como objetivos reivindicativos que tienden a la construcción de identidades y autonomías regionales. La restructuración de la política se opera en las organizaciones regionales mapuche, organizadas desde arriba hacia abajo, con un liderazgo de políticos mapuche que buscan reconocimiento y legitimidad frente al Estado de Chile y su clase política.

Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. La idea de entonces es que los indígenas son una "raza retrasada e incivilizada". En este ámbito, además, es un hecho que la sociedad

mapuche carece de la noción de movilidad social. Se establece así una confrontación en las elaboraciones programáticas de la élite política mapuche, al asumir la defensa de la raza indígena y renunciando a la defensa de los intereses de los mapuche pobres. De esta forma, la educación pasa a ser la prioridad estratégica para la integración social en la sociedad chilena.

Cautín pasa a ser el centro de la actividad política y del desarrollo del liderazgo político mapuche. Las organizaciones y redes indígenas más representativas se reunirán en torno a la tarea de subsanar necesidades que incluyen la defensa de las tierras colectivas, denuncias del maltrato, la exclusión y explotación de los comuneros. Sobre la base de estas demandas se fundan las primeras organizaciones mapuche, contribuyendo a enriquecer las representaciones figuradas sobre la integración, la identidad mapuche-campesina y la implementación de políticas sociales. La Sociedad Caupolichán se funda en 1910, con el objetivo de “la defensa de la raza y educación para los mapuches”. Esta sociedad, liderada por Venacio Coñoepan, cambia de nombre en 1934 y pasa a llamarse Corporación Araucana. En 1917, se funda la Federación Araucana, bajo la conducción de Aburto Panguilef, y en 1920, Antonio Chihuailaf funda la Unión Araucana. El surgimiento de tantas organizaciones es la expresión de la diversidad y divergencia de visiones, y del hecho de que ciertos líderes son vistos como aliados internos de los chilenos. Para el caso, ilustrativo es el programa de la Federación Araucana, que postula la creación de una República Indígena. Estas percepciones persisten en el tiempo y enfatizan los desafíos para el

análisis de las dos convocatorias históricas dirigidas a las entidades territoriales, que en el tiempo contrastarán las diferencias en las líneas de acción políticas de las organizaciones mapuche.

En Chile, en la década de 1960, la izquierda gradualmente gana fuerza electoral, al mismo tiempo que se operan importantes transformaciones sociales. En este nuevo escenario de múltiples cambios se producen relaciones de conflicto y de cooperación, transacción y acción, lo que facilita el empoderamiento social y político mapuche, y su propuesta de destacarse en su especificidad. Son tiempos de protagonismo de los mapuche pobres de las reservas indígenas, que ante el fracaso de la propuesta de asimilación y desindianización impulsada por las asociaciones indígenas pasan a la acción. La propuesta programática es la movilización por la recuperación de las tierras. Las comunidades mapuche, sobrepasando los programas de reforma agraria impulsados por el gobierno de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, comenzaron, en 1969, las “corridos de cerco”, esto es, la recuperación de tierras en la provincia de Cautín. La primera acción coordinada de este tipo se conoce como “el Cautinazo”. Los resultados electorales de entonces ofrecen una clave para comprender los fenómenos de expresión que tienen lugar en La Araucanía; en 1973 Rosendo Huenumán (Partido Comunista) último parlamentario mapuche electo en Cautín, gana con la primera mayoría de votos.

El golpe militar de 1973 marca el término de proceso de empoderamiento político mapuche. Toda una generación de recambio de dirigentes de comunidades y

de zonas urbanas es encarcelada, exiliada y asesinada. Los militares implementan la contrarreforma agraria y la Ley de División de las Comunidades Indígenas. Todo esto conlleva una propuesta programática con el objetivo de la defensa de la identidad y la sobrevivencia. El advenimiento de la dictadura militar trae como consecuencia la imposición de fronteras culturales, censura y violencia, que tiene por sustrato una profunda fractura social. Gran parte de la campaña política en contra de la dictadura militar se hace a costa del tan necesitado símbolo de resistencia mapuche que sugería la indeclinable decisión de luchar hasta las últimas consecuencias por la democracia. En la década de los ochenta, las fotos de los actos políticos de la coalición opositora al régimen militar representan a José Santos Millao y Lucy Traipe, entonces máximos representantes de la organización mapuche Ad-Mapu, con los más destacadas políticos chilenos. Para el caso indígena contribuyó a expresar la fuerza de la memoria subterránea indígena en su capacidad innovadora y subversiva de la imaginación, un cuestionamiento explícito de los postulados históricos y hegemónicos de la historia de Chile.

En 1989 se llevan a efecto las primeras elecciones presidenciales luego del régimen militar. La Concertación de Partidos por la Democracia, liderada por Patricio Aylwin, inició la captación de adhesiones, proceso que promovió el ascenso de nuevos dirigentes indígenas y empoderamiento de las organizaciones representativas de los intereses indígenas; concluyendo con la firma el Acuerdo de Nueva Imperial. El candidato a la presidencia, Aylwin, se comprometió hacer efectivo el reconocimiento constitucional de los pueblos in-

dígenas, crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena e impulsar su desarrollo e integración, respetando la diversidad cultural. Las organizaciones indígenas se comprometieron a apoyar el futuro gobierno y a canalizar sus demandas a través de los mecanismos de participación creados por el mismo.

Ante tan trascendente acuerdo, al interior de la dirigencia mapuche no se logró llegar a un consenso. Por un lado se alinearon los que confiaban en las promesas de los políticos chilenos, destacándose la más representativa organización mapuche, Ad-Mapu. Por otro lado, estaban los mapuche que, junto a otros líderes indígenas, consideraron que una adhesión de ese tipo coartaba su autonomía política. Una de las organizaciones mapuche que se marginó del acuerdo fue el Consejo de Todas las Tierras, que declaró “retomar la propuesta de autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche”. Vale destacar que ninguna de estas organizaciones que firmaron el Acuerdo de Nueva Imperial existe hoy. Una vez más, se verificaba la desarticulación y extinción de organizaciones mapuche que apostaban por la integración a través de las políticas de participación del Estado chileno.

Desde la década de los noventa, el itinerario de la agenda de las organizaciones mapuche sigue evolucionado en paralelo a los cambios políticos experimentados a nivel global, siendo el eje principal la lucha reivindicativa de las comunidades rurales y urbanas, que a su vez ha mutado de reivindicaciones sociales y económicas a la políticas, entendida como una política indígena con objetivo de profundizar la democracia. Los cambios en la estructura organizacional y la prevalencia de

la línea histórica de autodeterminación definen la identidad mapuche del nuevo milenio. Las nuevas organizaciones mapuche son estructuradas de abajo hacia arriba; consecuentemente, los líderes mapuche no buscan reconocimiento y legitimidad frente al Estado-nación Chile y su clase política. La arena política indígena de hoy es intraorganizacional e interorganizacional, envuelta en la discusión de la política nacional y trenzando alianzas nacionales e internacionales.

La línea programática de autodeterminación incorpora cuatro ejes de acción política: (i) autonomía jurisdiccional, (ii) recuperación de tierras ancestrales, (iii) derechos colectivos de propiedad y (iv) reconocimiento constitucional. Derechos por lo demás avalados por acuerdos internacionales y ratificados por el Estado de Chile; en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambas convenciones redactadas con el propósito de garantizar un marco universal de estándares mínimos para la dignidad, bienestar y derechos de los pueblos indígenas del mundo. De esta forma se sitúan más allá de la base material de la reducción indígena; emplazándose en los umbrales de la comunidad imaginaria decolonial. Es decir, en un proyecto vital de identidad integral que contempla una política indígena con objetivo de profundizar la democracia sobre la base de los derechos indígenas que emanan de la legislación internacional.

La refundación del Estado de Chile desde la perspectiva de una epistemología del sur plantea un dilema entre refundar o refundir el Estado-nación colonial,

cuando en esencia se trata de una apuesta programática de cara al nuevo siglo. Un paso sustantivo en este sentido fue el informe final, en 2004, de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato, que resumió los puntos más relevantes de la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas. Sin embargo la ausencia de un sistema de gestión que implemente las recomendaciones de este informe ha demostrado el fracaso de esta iniciativa.

Con todo, el futuro es preocupante, la falta de responsabilidad en el manejo de las relaciones con los Pueblos Originarios y el estado de Chile ha llevado a agravar el grado de conflictividad, así como se constata un deterioro en las relaciones de convivencia. Un país que suele explicar el deterioro de su convivencia en términos exclusivamente económicos, el desafío que se impone es la reconstrucción del tejido social e institucional y la superación de las causas estructurales de los conflictos. La causa que origina el llamado “conflicto mapuche” es la violencia sociopolítica que ejerce el Estado. En los últimos años los conflictos sociopolíticos que han tenido como actores a las poblaciones locales, las empresas transnacionales y el Estado se ha expresado en tres situaciones emblemáticas.

En primer lugar, el impacto socio-ambiental, derivado de la ejecución del proyecto de la central hidroeléctrica Ralco en el Alto Bío Bío, que ocasiona el desalojo forzoso de comunidades mapuche, la inundación de cementerios y sitios ancestrales sagrados. Por ello, la realización de dicho proyecto dejó en evidencia la incompatibilidad en la regulación de los recursos naturales como condición para asegurar el derecho al agua de

los pueblos indígenas. Desde el retorno de la democracia en 1990, se denomina conflicto mapuche a las movilizaciones y acciones directas de las comunidades y organizaciones mapuche en contra de las plantaciones de monocultivo y proyectos de infraestructura de empresas transnacionales en territorio mapuche. Existe un amplio consenso en torno al hecho de que uno de los principales ejes del conflicto mapuche es la disputa por la tierra. De acuerdo a la opinión pública, el reclamo de las comunidades mapuche en la Araucanía es justo y legítimo. Desde la perspectiva de la historia del tiempo presente se puede afirmar que el patrimonio territorial de las comunidades mapuche fue usurpado durante el régimen dictatorial de Pinochet. Los decretos leyes 2.568 y 2.570 facilitaron que las tierras asignadas a las comunidades mapuche por la reforma agraria fueran devueltas a antiguos hacendados o transferidas al Estado; las que luego (1974-1980) fueron vendidas a las nacientes empresas forestales. Con el fin de disminuir las tensiones entre las comunidades mapuche y empresas forestales, el Estado inició una operación de transferencia de tierras a través del procedimiento de adquisición, transferencia y saneamiento legal de tierras de las reservas indígenas.

El objetivo es asegurar la protección de las tierras ancestrales; sin embargo, la legalidad impuesta es deficiente o contradictoria. Los títulos de merced, entregados a los mapuche reducidos entre 1883 y 1930 no tienen la misma fuerza legal que los títulos de propiedad privada de los colonos. Los comuneros que pretenden resolver el problema de la credibilidad del testimonio y la evaluación de la

presencia indígena y su pertenencia al territorio con sus lugares sagrados, sus cementerios, donde están los antepasados se ven frustrados, ya que los derechos de propiedad vigentes no lo contemplan.

Por último, vale destacar la creciente importancia que adquiere la aplicación de la ley antiterrorista en contra de los comuneros mapuche. A partir de la década de los noventa esta modalidad ha sido materializada en norma sustantiva de hacer política a través del sistema judicial. Los sectores políticos interesados en perpetuar la política de reserva indígena al servicio de sus intereses albergan grandes expectativas en el poder judicial –jueces y fiscales–, para resolver el llamado conflicto mapuche en La Araucanía. Es decir, en que la solución al conflicto será policial.

Como anteriormente se indica, el deterioro en las relaciones de convivencia impone la necesidad de reconstruir el tejido social e institucional del Estado-nación. Desde esta visión convergente, implica considerar que el ejercicio de la violencia sociopolítica sobre la base de la lógica colonial –donde lo que para algunos es prescindible, para otros es indispensable, lo que para algunos es deseable, para otros es peligroso– debe ser superada y asumida. Desde la percepción divergente, esto consiste en separar los elementos que integran la realidad hasta hacer perder su conexión entre ellos, como una forma de relacionarnos con la imaginación, de interferir en las percepciones; para que nos permita ver “más allá” del horizonte colonial. *Feley may!*

JORGE CALBUCURA

EL MALESTAR CULTURAL DE LOS CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES EN CHILE

Las críticas al proceso de modernización neoliberal, inaugurado por la dictadura y profundizado por los gobiernos posteriores, tienen un antecedente histórico que puede remontarse a sus orígenes, pero fueron expresadas con mayor fuerza en la esfera pública por el movimiento social por la educación el año 2006 y se consolidaron el año 2011. Si bien es cierto que dichas críticas eran patentes desde inicios de la década de los noventa, habiendo antecedentes históricos, no fue sino hasta las marchas multitudinarias, convocadas por agrupaciones de estudiantes secundarios en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), cuando la protesta social aparece con más fuerza en la esfera pública. Esta relación entre la modernización y las luchas sociales, ha sido discutida durante el último tiempo por medio de lo que podríamos denominar el 'malestar'. En términos generales, dicha lectura de los conflictos sociales y ambientales en el Chile reciente, sostiene que las luchas en la esfera pública responden a un malestar cultural que aparece como resultado de la modernización neoliberal. Haciendo alusión a la célebre obra de Sigmund Freud de 1930 *El malestar de la cultura* (*Das Unbehagen in der Kultur*), en el debate político e intelectual chileno se sostiene que el malestar es un fenómeno difuso que cristaliza las insatisfacciones, precariedades e inseguridades subjetivas. De acuerdo a esto, el proceso de neoliberalización implicó un conjunto de restricciones del bienestar subjetivo en favor del crecimiento económico en base al consumo y la gobernabilidad democrática

de la política binominal de los acuerdos.

Entonces, el malestar opera como un gatillante de las luchas sociales que aspiran a un cambio del modelo económico-político basado en derechos sociales universales y en el desarrollo sostenible. Para profundizar este argumento, abordaré parte del debate político-intelectual en torno al malestar y la modernización en Chile, para luego detenerme en su relación con los conflictos sociales y ambientales. Así, durante los últimos años, en la esfera pública el malestar con la política se desplazó a un malestar con el modelo económico-político. ¿Cuál es la relación entre el malestar y las luchas sociales en la esfera pública? La tesis del malestar vendría a responder esta pregunta, pues no solo aparece como diagnóstico de la sociedad chilena, sino además termina por justificar la transformación social del modelo neoliberal. Los conflictos sociales y ambientales podrían ilustrar esta tesis, en el momento que plantean claras críticas al modelo neoliberal subsidiario y extractivista. Al final de esta nota de investigación, se aborda parte del debate actual con el interés de mostrar su pertinencia para la discusión teórica y política sobre la modernización en América Latina.

El malestar cultural y la modernización

La tesis del malestar en Chile es una clave de lectura que suele referir al informe de desarrollo humano de 1998 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicho informe, titulado "Las

paradojas de la modernización”, abrió un debate sin precedentes en Chile que se ha mantenido en la esfera pública hasta el día de hoy. Desde un punto de vista teórico, la tesis del malestar en Chile se remonta a ciertas reflexiones del politólogo Norbert Lechner relativas a sus análisis del campo político en el período de transición política de la década del noventa. Según Lechner, ya en los inicios del proceso de democratización en los años noventa, es posible identificar ciertos síntomas del malestar representados por la distancia entre ciudadanía y política. Un malestar entendido como una “disonancia entre la política tal cual es percibida por la ciudadanía y, por otro lado, la imagen heredada de la política”. Es claro que para Lechner la modernización capitalista que comenzó en dictadura, resultó en la incubación de un malestar que se expresa en aquella disonancia entre la ciudadanía y la política. O, para ser más preciso, entre la imagen que han heredado y la que actualmente tienen los chilenos respecto de la política. Dicha “disonancia”, que en sus primeros escritos se manifestaba en un problema de “confianza” y “representación política”, es constatada con los datos electorales y las encuestas de opinión. Ampliando el concepto de Lechner en el estudio del PNUD, el malestar fue leído en términos de desprotección e inseguridad. Cualquiera sea el caso, se trata de un malestar subjetivo que enlaza el punto de vista de los individuos con la vida política.

La tesis del malestar que se fragua en el informe del PNUD, sostiene que todo proceso de modernización trae consigo la disolución de los referentes ideológico-culturales en la política (lo que Lechner llama “mapas políticos”), entendida

como parte del proceso de diferenciación estructural de las sociedades que transitan desde órdenes sociales tradicionales a otros modernos. Desde la sociología, la modernización implica la fragmentación del sentido y la complejización de los sistemas sociales. Sin embargo, para Lechner, la modernización capitalista implementada en dictadura, tuvo ribetes particulares. El malestar descrito es el correlato de un proceso de modernización de tipo neoliberal, esto es, un proceso que consistió en la mercantilización de diferentes campos de la vida social y la privatización de los bienes públicos. La transformación del campo político hacia una matriz centrada en el mercado, terminó por dismantelar al aparato estatal que garantizaba servicios públicos como la salud, la educación, la vivienda y la previsión social, cambiando las condiciones sociales e históricas de la subjetividad en Chile. La modernización capitalista trajo consigo una desprotección social como contraparte de los criterios de la competencia y el esfuerzo individual para acceder a dichos bienes. Siguiendo la crítica de la razón instrumental de Max Horkheimer, el malestar aparece aquí como una expresión de un proceso de instrumentalización de la subjetividad que se constituye a partir de las referencias a los sistemas político y económico. La expansión del mercado a otros ámbitos de la vida social, significó la configuración de un “nosotros” débil que aparece como “una fuente primordial de inseguridad y malestar social”.

Las críticas a la tesis de Lechner se levantan al poco tiempo de publicado el informe del PNUD (1998). Cabe destacar la crítica de José Joaquín Brunner, que cuestiona la tesis del malestar respecto del

proyecto modernizador. Para Brunner, no hay algo así como un malestar con la modernización en la sociedad chilena, sino “un proceso de evolución y adaptación de la moral y los valores a las nuevas condiciones de vida urbana, relativamente secularizada y con mayor autonomía de las personas”. Sin detenerse en el detalle de su argumentación, para Brunner la supuesta tesis del malestar cultural no es sino una tesis sobre el malestar general que produce todo tipo de modernización. Tesis que, desde su punto de vista, sería erróneo aplicarlo al caso chileno con los datos de aquellos años. En el caso de Brunner, habría algo así como una “fricción” en la sociedad chilena, pero sería un problema de correspondencia entre los criterios normativos que provienen de la modernización y las condiciones sociales reales logradas por dicho proceso. Entonces, la sociedad no tendría un malestar con la modernización neoliberal, sino que está sufriendo cambios normales que forman parte de cualquier proceso de este tipo. Aquello que los investigadores del PNUD llamaban “malestar”, no era sino parte de un proceso de adaptación entre las expectativas de los ciudadanos que la propia modernización capitalista promete y las condiciones reales de la vida que difícilmente logran satisfacer dichos deseos.

Los conflictos socio-ambientales del Chile recientes

Luego de las movilizaciones sociales que comienzan el año 2006 con el movimiento estudiantil, la tesis del malestar vuelve a aparecer en la discusión pública, lo que obliga a políticos e intelectuales a revisar las conexiones entre la modernización y

las luchas sociales. ¿Por qué existe este descontento que moviliza a millones de personas, si, como nunca antes, Chile cuenta con una situación de bienestar dada por la democracia política y el libre mercado? El año 2011, la tesis del malestar era directamente relacionada con el cuestionamiento del modelo neoliberal implementado en dictadura y administrado por los gobiernos democráticos. En enero de 2012, Pedro Güell, coordinador ejecutivo del equipo de investigación del informe del PNUD de 1998 y asesor del segundo gobierno de Michelle Bachelet, sostuvo que “2011 fue en Chile el año del malestar expresado en las calles”. Según Güell, el proceso de transformación de la sociedad chilena avanzó desde un “malestar difuso” hacia la “protesta social” de los nuevos movimientos sociales. Contra los críticos del informe de 1998, Güell argumenta que el malestar se expresó silenciosamente, esto es, tuvo un desarrollo implosivo que irrumpe con la consolidación del movimiento estudiantil del año 2011 como actor político en la esfera pública. Dicho silencio, puede explicarse por el “*miedo chilensis*” de hablar públicamente por parte de las generaciones que vivieron el autoritarismo, los mecanismos de gobernabilidad y enclaves autoritarios que negaron la traducción política del malestar, y el proceso de mercantilización de la vida cotidiana en la sociedad chilena donde la coordinación social está determinada por el mercado. De acuerdo a Güell, el proceso de modernización hizo posible un fortalecimiento de las clases medias pero profundizando el sentimiento de inseguridad asociado a la precariedad laboral y la insatisfacción respecto de la promesa del éxito de la transición política.

El malestar con el proceso de modernización queda al descubierto con la emergencia de luchas sociales que se erigen contra la mercantilización de los bienes públicos como la educación, la previsión y la vivienda, pero también contra el modelo de desarrollo extractivista basado principalmente en la iniciativa privada. En el año 2011 se consolidan los movimientos sociales como forma de la acción política en Chile. A diferencia del año 2006, las luchas por derechos sociales como la educación fueron acompañadas por nuevos conflictos ambientales en la esfera pública que refieren a un cuestionamiento de la explotación de los recursos naturales como fundamento del desarrollo. El malestar cultivado durante los años de la transición, se expresa en los conflictos sociales y ambientales, entrado el siglo XXI. Lo que se pone en cuestión es la legitimidad de todo el modelo económico-político, simbolizado en el Estado subsidiario y la democracia procedimental, en el modelo extractivo de desarrollo y en la Constitución forjada en dictadura.

En el caso de los conflictos sociales, cabe destacar los movimientos por la previsión social y la educación como derechos sociales, los cuales tomaron forma en campañas ciudadanas contra la configuración neoliberal de los sistemas de pensiones y de la educación. La previsión social quedó restringida a un modelo de capitalización individual y administración de fondos por empresas privadas con fines de lucro, mientras que la educación se basó en un sistema de provisión dominado por entidades con fines de lucro y un modelo de financiamiento dependiente de las familias y el subsidio estatal.

En este contexto, desde 2016 la campaña por “no+AFP” (no más Administradores de Fondos de Pensiones) volvió a poner en la discusión pública la importancia de un sistema de previsión social basado en la solidaridad y el reparto. Este modelo que exige mayor responsabilidad de las empresas y del Estado en la composición de los fondos y en la administración de las pensiones. De igual modo, el movimiento estudiantil, esta vez liderado por los estudiantes universitarios, propuso un modelo de educación basado en el carácter público, gratuito y sin fines de lucro en todos los niveles del sistema. En ambos conflictos sociales, las luchas fueron contra la mercantilización de ciertos servicios públicos que deben ser garantizados por el Estado, favoreciendo su democratización a través de derechos sociales universales.

Al mismo tiempo, las marchas contra proyectos mineros, termoeléctricos, hidroeléctricos y forestales, entre otros, cuestionaron el modelo de desarrollo basado en la extracción y explotación de recursos naturales tanto en el sur como en el norte de Chile. Luego de algunos conflictos aislados a fines de la década del noventa, las campañas contra el proyecto Barrancones (2010) e Hidroaysén (2011) emergieron en la esfera pública, poniendo el valor de la naturaleza como forma de crítica al proyecto modernizador del neoliberalismo. Dicho malestar tuvo una expresión focalizada en cada una de las localidades afectadas, pero también a nivel nacional en diferentes puntos del país. La esfera pública hizo posible la articulación de diferentes demandas, definiendo el malestar con el modo de desarrollo. La composición de

estas luchas es heterogénea y puede relacionarse tanto con los sectores medios de las localidades urbanizadas como por las comunidades que ven sus vidas interferidas por proyectos extractivos. Frente a esto, las críticas no solo ponen el acento en las dinámicas entre sociedad y naturaleza, sino también señalan la oportunidad de pensar un modelo de desarrollo basado en la cultura, el conocimiento y la información. El malestar ligado a la explotación de recursos naturales ha tenido respuestas políticas de diferentes índoles, desde comunidades indígenas en conflicto con las empresas transnacionales, pasando por movimientos conservacionistas, hasta iniciativas públicas por el uso de energías renovables que siguen siendo extractivas. Dicha puesta en valor de la naturaleza deviene un malestar frente al modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales.

El malestar en el Chile de hoy

En junio de 2017, el equipo de PNUD vuelve a publicar su informe anual sobre desarrollo humano, esta vez relativo a las desigualdades. Titulado “Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile”, el estudio profundiza en una de las mentadas “causas” del malestar cultural. El estudio sostiene que si bien no es posible establecer relaciones causales en este tipo de estudios, hay evidencia que podría sustentar la hipótesis que relaciona directamente las desigualdades y el malestar en la sociedad chilena. Para esto, no bastaría solo hacer mención a los datos de encuestas de opinión, pues la cultura política expresa procesos de transformación de larga duración que

deben ser abordados junto a varios otros instrumentos de tipo cualitativo. El malestar subjetivo sería aquello que conecta las desigualdades y las luchas sociales. Desde este punto de vista, la modernización significó un proceso de democratización y crecimiento económico que disminuyó la pobreza y redujo –en parte– la inequidad de ingreso, pero al mismo tiempo profundizó ciertas desigualdades no convencionales que afectan la vida cotidiana, la participación política, el medio ambiente, entre otras. Recordando el informe de 1998, la modernización es un proceso paradójico, que implica avances y retrocesos de acuerdo al estándar de la democracia y los derechos humanos.

Contra la tesis del malestar, se esgrime la tesis del éxito del proceso de modernización capitalista que encuentra sus raíces en la crítica de José Joaquín Brunner, pero que hoy se sustentan en las estrategias políticas de las elites que componen la coalición de derecha. En un informe recientemente publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP Chile), ligado al empresariado y a la actual oposición política de derecha, sostiene no solo la inviabilidad de la tesis del malestar, sino además, que las movilizaciones y las insatisfacciones manifestadas en las encuestas son resultado del éxito de la modernización neoliberal en Chile. Así, mientras que la tesis del malestar de fines de la década de los noventa terminó por justificar las luchas sociales y el cuestionamiento del modelo neoliberal el año 2011; la tesis del éxito del modelo asiente que los chilenos tienen una insatisfacción respecto de las soluciones públicas, pero no de las soluciones privadas a problemas públicos, reconociéndose como sujetos sa-

tisfechos con el acceso a ciertos servicios, aunque descontentos con el desempeño de las instituciones y el Estado. Antes que tratarse de un cuestionamiento de la modernización, es una defensa del modelo neoliberal por la eficiencia del mercado como proveedor de servicios y un alegato contra el Estado como garante. En otras palabras, si es que hubiera algo así como un malestar, este sería con las incompetencias del aparato público y no con la modernización neoliberal.

Finalmente, de un modo ambivalente, Carlos Peña, actual rector de la Universidad Diego Portales, ha sostenido que el malestar del cual se habla es una insatisfacción que surge de la disparidad entre las expectativas de los ciudadanos y las condiciones sociales reales. Según el rector, este malestar general, nada tiene que ver con aquel malestar con el modelo económico-político resultante de la modernización; más bien, desde esta óptica, la ciudadanía habría encontrado mayores grados de autonomía a través del consumo, lo que hablaría del éxito del proyecto neoliberal. Las interacciones sociales a través del dinero, cuestión que solo es posible gracias a la modernización capitalista, permiten una forma de socialidad donde la subjetividad no es puesta en riesgo. A pesar de ello, todo proceso modernizador se caracteriza de ambivalencias que pueden ser retrotraídas a ciertas patologías sociales y a la falta de correspondencia entre facticidad y validez de los órdenes sociales. Este fenómeno sería aquello que el informe PNUD (1998) refería al malestar. Para Peña, la clave de las elites políticas es traducir dicho malestar en una propuesta que acompañe la modernización, pero corrigiendo las des-

igualdades arbitrarias con el objetivo de mitigar sus efectos patológicos, así como disminuir el hiato entre las condiciones sociales de los chilenos y sus expectativas celebradas gracias al consumo.

Cualquiera sea el caso, lo cierto es que el actual escenario se caracteriza por una discusión de las elites políticas e intelectuales respecto del diagnóstico de los procesos sociales que se desencadenaron luego del año 2006. Hoy en día, en Chile están en juego estas diferentes interpretaciones sobre los últimos conflictos. Siguiendo a Lechner, precisamente por esta separación entre la política y la ciudadanía es que las primeras se ven en un problema a la hora de interpretar los deseos y pensamientos de los grupos medios que componen la mayoría del país. La pregunta por despejar, entonces, radica en si el malestar conduce a un anhelo de cambio estructural del modelo neoliberal. Esta pregunta respecto de la teoría social y política detrás de los estudios de la modernización en Chile es clave, pues pone en relación el rendimiento explicativo de la teoría como también revela el proyecto normativo que de ella se desprende. Considerando lo dicho hasta aquí, poniendo atención en las demandas sociales y las interpretaciones de las elites, habrá que imaginar una transformación política que, sin aspirar al fin del sistema capitalista mundial, logre instaurar un nuevo modelo basado en derechos sociales universales y en el desarrollo sostenible. Estos serían los nuevos fundamentos normativos de la teoría de la modernización en Chile.

NICOLÁS DEL VALLE ORELLANA

ALGO CAMBIO EN CHILE EL 2011: BREVE DEBATE SOBRE UN ACONTECIMIENTO POLÍTICO, SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Introducción

El 30 de junio del año 2011, en el centro de la ciudad de Santiago, se congregaron miles de personas en la que sería una de las más grandes manifestaciones de la que se tenga registro en Chile desde el retorno a la democracia. Cifras oficiales de aquel día, hablan de más de un millón de personas manifestándose simultáneamente a lo largo del país en apoyo a la demanda de educación gratuita y de calidad impulsada por el movimiento estudiantil. Esta fecha quedaría grabada en nuestra historia local, no solo como el inicio de una época particularmente conflictiva para los chilenos desde el punto de vista social, sino también como un período que marcaría significativamente la relación de la sociedad con lo político y lo colectivo en los años posteriores.

Al hacer un ejercicio evaluativo de las causas que provocaron un estallido social de la magnitud del que ocurrió el año 2011, muchos expertos, políticos y ciudadanos comunes destacaron varios aspectos estructurales y cotidianos críticos que hacían predecible un evento de esta naturaleza. Pasada la etapa más álgida de protestas, una “evaluación de daños” sostuvo que no solo las instituciones del Estado quedaron en mal pie, sino que gran parte de nuestro sistema de representación política, sus representantes y las élites que lo componen. En la lectura de este fenómeno, vemos que muchas de las opiniones expresadas en el debate público parecieron tener a primera vista un denominador común: algo cambió en Chile después del

2011. Sin embargo este “algo” no siempre podía ser identificado con claridad, no tenía un nombre, ni podía ser encasillado dentro de un solo concepto o problema. No al menos hasta los últimos años. Este “algo” no era un malestar que recién haya aparecido este año clave, sino que germinaba en el interior de la sociedad desde hace al menos una década. Esta sensación a ratos indefinible, era síntoma de un malestar mayor, con el modelo económico y social forjado en dictadura y consolidado en democracia, con las expectativas generadas por este sobre todo en términos de inclusión y que no pudieron ser satisfechas. Molestia con la democracia de los consensos y el empate partidista entre las dos fuerzas políticas hegemónicas –Alianza por Chile y la Concertación de Partidos por la Democracia–, con la falta de representatividad de la política, y de los políticos, vistos cada día más lejos de los problemas cotidianos de la gente. Molestia con el déficit en términos de igualdad y con las injusticias provocadas por las enormes desigualdades que hacen imposible un proceso de integración social; molestia con el extendido discurso meritocrático que no es palpable para grandes sectores de la población como señalaron Engel/Navia (2006), Barozet (2006), Araujo (2009) y Araujo/Martuccelli (2012).

A partir de este contexto de conflictividad y cuestionamiento generalizado al statu quo que se instaló en Chile a partir de este momento histórico, es que me gustaría discutir en el siguiente artículo dos ideas claves. La primera de ellas, que

el movimiento social de 2011 no fue una acción de protesta o un movimiento social más, sino que fue el acontecimiento que encauzó políticamente las expresiones –muchas veces conflictivas– de los cambios sociales experimentados por los chilenos durante los últimos años. Y la segunda, que este acontecimiento y la disputa política que nace a partir de él, tuvo el gran mérito de articular el reclamo y la molestia de la gente en torno a la cuestión de la igualdad y la desigualdad, binomio cuya comprensión y debate en el espacio de lo público, superó ampliamente las visiones económicas y/o jurídicas predominantes.

Relato de un proceso: del síntoma a la cristalización de los malestares

El punto de partida del argumento de este artículo es que las protestas estudiantiles y de un sinnúmero de manifestaciones de la población que se articulan desde y a partir del año 2011, generaron cambios importantes en la relación sociedad-política, pero también en la forma en que la gente percibe sus problemas cotidianos, sus causas y también a sus responsables (llámese instituciones del Estado, empresas privadas, etc.). Este proceso fue posible, en gran medida, por la grieta que el movimiento social y sus actores (principalmente el estudiantil) ocasionaron a la estructura hegemónica predominante a través del cuestionamiento generalizado y transversal a las formas de organización social excluyentes que predominan en Chile. Ocurrida esta dislocación se observa claramente una agudización de los conflictos y una mayor exposición públi-

ca de discursos, actores sociales y políticos (mucho de ellos antes inexistentes), pero también de demandas históricas (en los ámbitos de la educación, la salud, el laboral, el previsional, etc.) que depurados en sus causas, parecieron compartir un origen problemático común: las desigualdades sociales.

Todos aquellos grupos políticos que surgen y/o se articulan a partir de 2011 tuvieron un rol activo en la interpelación al orden de la vida cotidiana y a las relaciones de poder que la cruzan, dando por primera vez representación clara –“un cuerpo político”– a los malestares de la sociedad chilena. El resultado de esta operación no fue en ningún caso irrelevante, puesto que hizo posible la articulación de grupos sociales, intelectuales y populares con un rasgo distintivo que los hizo diferentes a cualquier otra unión de movimientos surgida en años anteriores: su carácter de acontecimiento (Rancière 2006, 2012). Pero ¿Qué significó esto exactamente? Que el movimiento de 2011 tuvo la capacidad de alterar el curso normal de las cosas, de cuestionar lo estable y lo hasta ese momento legítimo. Fue un evento disruptivo que logró por primera vez agrupar demandas de aspectos problemáticos reconocibles y compartidos por los miembros de la sociedad, y que pusieron en cuestión el funcionamiento de los vínculos sociales en torno a un punto fundamental: los abusos; cotidianos, de los poderosos, de los mejores ubicados en la escala social. Con la idea del acontecimiento no quiero afirmar que este sea un hecho dado en un momento histórico único y con capacidad de expresar todos los problemas de la sociedad, sino que quiero poner énfasis en aquellas

características asociadas a él que hizo visibles a los invisibles, dio voz a los sin voz, e hizo públicos e identificables los daños expresados por quienes los sufren, aspectos que dan la oportunidad de pensar este fenómeno de forma excepcional. En breve entonces, se irá sobre el proceso de gestación de este acontecimiento, así como su efecto transcendental en los términos del debate social y político actual.

Si volvemos unos años atrás, y particularmente a aquellos anteriores a 2010, podemos reconocer la existencia de sujetos invisibles, sujetos dañados por malestares y demandas insatisfechas ligadas sobre todo a la inseguridad e incertidumbre con la que los individuos en Chile enfrentaban su vida en distintos ámbitos (salud, educación, trabajo, protección social, etc.). Esta tesis ampliamente discutida a partir del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 1998, “Las paradojas de la modernización”, fue sin duda un punto de partida para documentar los primeros síntomas del malestar de la sociedad con algo mayor. Este síntoma a todas luces parece haberse depurado con el paso de los años hasta llegar a 2011 con el reconocimiento de la desigualdad como su causa pero en un sentido amplio y generalizado (desiguales oportunidades, desiguales condiciones, desiguales formas de enfrentar la vida, desigualdad en el trato cotidiano, entre muchas otras).

En lo que respecta al diagnóstico que los actores hicieron sobre el acontecimiento encontramos varias causas. Acelerados procesos de cambios y transformaciones provenientes de fenómenos como la globalización, la modernización, la individualización, a los que se sumaron procesos lo-

cales como el cambio de régimen político (dictadura-democracia) y el advenimiento neoliberal, con su impacto en la cultura y sus contradicciones. El segundo diagnóstico del acontecimiento se asocia a una nueva situación social presente en los últimos años y que se expresa en una fuerte demanda de cambios en un escenario donde hay un cuestionamiento generalizado a lo jurídico, lo institucional, y a la clase política; pero que sobre todo, cuestiona los criterios éticos y morales que conciernen al ámbito subjetivo y de las interacciones cotidianas de los chilenos (Araujo 2013, 2016; Frei 2016). Este panorama general de malestares compartidos sin embargo, habría necesitado del movimiento estudiantil como válvula de explosión, en este sentido ¿muchos se preguntarán por qué la educación y no otro ámbito? Porque la educación es un tema particularmente sensible para la sociedad chilena, ya que en ella están puestos los anhelos del reconocimiento, la esperanza de movilidad y distinción social, valores enaltecidos y promovidos tanto desde el Estado como desde las élites sociales y políticas.

Una pregunta importante en este proceso de gestación del acontecimiento es: ¿por qué si estos malestares eran reconocidos por los individuos en Chile desde hace un par de años atrás, no existieron antes movilizaciones de descontento que los pusieran en evidencia? Una respuesta a esta pregunta requiere mostrar dos factores que pudieron haber funcionado a modo de atenuante o como “dique de contención”. El primero de ellos se asocia a un deterioro de los vínculos sociales producto de la acción desarticuladora que ejercieron los militares sobre las organizaciones políticas, y sobre la sociedad

en general, a través del miedo, la represión, y la violación sistemática a los derechos humanos a partir del año 1973. Esta desestructuración prevalece con los años, haciendo compleja la reestructuración política y por ende la articulación de descontentos y movimientos sociales. Recordemos también, que la dictadura de Pinochet vino acompañada de una completa reestructuración de la matriz social que en una nueva versión, combinó neoliberalismo y régimen autoritario con consecuencias económicas y culturales profundas desde el momento en que los derechos sociales más básicos de la sociedad fueron privatizados, el mundo del trabajo flexibilizado y las fuentes de estabilidad y cohesión social fueron desapareciendo. Con el paso de los años y a medida que se instala el nuevo modelo económico, se transita hacia una sociedad débil políticamente, al desamparo de la protección del Estado, y que empuja aceleradamente a sus individuos hacia el mercado. La inclusión social en este contexto se redujo principalmente a una participación en el consumo, perdiendo así sentido la búsqueda de soluciones política y colectivas a los problemas. Un segundo factor atenuante lo encontramos en la política de baja intensidad que ejercieron los gobiernos de la antigua Concertación de Partidos por la Democracia (CPPD) a partir de los años noventa. En esta etapa prevalece el eje dictadura-democracia en lo simbólico, lo que en lo práctico se traduce en cooptación y disciplinamiento de los grupos inconformes con la transición, aspecto que fue clave para limitar la expresión de descontento en democracia. En esta etapa además se consolida el modelo económico de la dictadura en un

ambiente donde prima un débil lazo social que no puede ser asegurado a través del colectivo político.

Sin embargo, a los factores atenuantes hay que agregar factores detonantes del acontecimiento. Aquí, encontramos dos de tipo estructurales y uno de tipo contingente. El primero de ellos se asocia al principio de igualdad de oportunidades ampliamente extendido al interior de la sociedad y que no puede ser verificado en la realidad. Caso puntual, el principio meritocrático asociado sobre todo a la educación que deja de tener centralidad, en vista de que el talento y las oportunidades aún siguen atadas a asuntos de adscripción social (el lugar de origen y la clase social). El segundo detonante se asocia al recambio generacional de los líderes de las movilizaciones sociales de 2011. Las nuevas generaciones de manifestantes estuvieron compuesta por dirigentes que en su mayoría nacieron y se criaron en democracia, factor histórico que los hace perder el miedo al conflicto y a la regresión autoritaria, fantasmas con los que convivieron sus padres y abuelos en la década de los noventa. Un último factor detonante, se asocia a la llegada de la derecha al poder en la figura de Sebastián Piñera que rompe el eje ideológico dictadura –democracia dando paso a una expresión abierta del malestar, sobre todo porque Piñera es simbólicamente representante del modelo que lo causa. A esta reacción simbólica también se suma la inexperiencia para gobernar que mostró la derecha chilena y que reflejó en un errático manejo de los conflictos y en la poca influencia sobre los líderes sociales, hechos que habrían acelerado significativamente la manifestación pública de descontentos.

En lo que respecta a las consecuencias del acontecimiento, pueden resumirse en tres. La primera consecuencia es una cristalización de daños en el espacio de lo público y un cambio en el sentido común de las persona a partir de una mayor percepción de los abusos perpetrados por quienes se encuentran en ventaja económica, social y política (por ejemplo: casos de colusión empresarial que afectan directamente a los consumidores, así como casos de corrupción y financiamiento ilegal de la política). Una segunda consecuencia se asocia a una amplia conciencia adquirida respecto al lucro a costa de los derechos fundamentales (salud, educación, entre otros) que los chilenos perciben en los intercambios cotidianos. Por último, una consecuencia importante del acontecimiento fue la visibilización pública de daños en una dimensión ética y moral: ligada a la desigualdad en el trato percibido sobre todo por los peor ubicados en la organización social. En este sentido habría una fuente de sentimientos de injusticia con las élites económicas, que no tiene que ver con que ellos posean gran cantidad de recursos, sino que tiene que ver con el trato que tienen con el resto de los grupos de la sociedad y con los procedimientos con los cuales se relacionan con las demás personas (Barozet/Mc Clure 2015).

Conclusión

Después del acontecimiento entonces, vemos una movilización amplia de organizaciones que tienen como principal característica no pertenecer a los partidos políticos tradicionales (con algunas excepciones). Estos habrían tenido la

capacidad de articular una gran variedad de identidades y demandas sectoriales históricas, las que mediante un proceso de exposición pública, buscaron transformarse en un sujeto político con aptitud transformadora. Lo que une e identifica a estos grupos en conflicto es su identificación con un daño común: las desigualdades, aunque estas no solo se asocian a las económicas relacionadas con la pobreza, donde el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad individual son claves para superarlas. El problema que parece estar en el centro del malestar de los individuos en Chile luego de 2011 apunta a un cuestionamiento amplio de las desigualdades; una mixtura de ellas, que transgrede el ideal igualitario en su variante de oportunidades, de condiciones y de resultados. A partir del acontecimiento, hablar de desigualdades para los sujetos y grupos políticos involucró una crítica directa a la forma en que la estructura social hace prevalecer una lógica jerárquica y de privilegios. Se cuestiona activamente la concentración de ingresos y el acaparamiento de los recursos por parte de un pequeño grupo de la sociedad. Se discute sobre el acceso desigual a bienes y derechos básicos tales como la educación, la salud, así como la baja movilidad social. Toman centralidad por primera vez las desigualdades en el mundo laboral (salarial y derechos). Se cuestiona la seguridad con la que los individuos enfrentan proyectos familiares e individuales, poniendo en el centro de la discusión la desigual libertad para tomar decisiones. Aparecen con fuerza la desigualdad en el trato cotidiano, visto sobre todo a través de situaciones de abuso (empresas sobre todo), pero que

también en el desprecio, y el ninguneo, la falta de respeto y el no reconocimiento de la dignidad, es decir, todas aquellas desigualdad ilegítimas que provocan vergüenza, humillación y violencia (Araujo 2016; Frei 2016; PNUD 2017).

Un último punto fundamental: la riqueza de la discusión sobre las desigualdades que se revitaliza con el acontecimiento, si bien no ha tenido un efecto performativo inmediato, ha logrado incluir cambios paulatinos a la agenda del gobierno (la ley de gratuidad en la

educación es un ejemplo de ello). Pero sin duda su mayor logro fue revitalizar la demanda igualitaria en el debate, solo que esta vez en clave política, un paso sin duda necesario para actualizar los acuerdos sobre convivencia en una sociedad que se ha transformado culturalmente y que exige que las instituciones y sus representantes se encuentren a la altura de ese desafío.

CLAUDIA MALDONADO GRAUS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFIAS

- Araujo, Kathya (2009): *Habitar lo social. Usos y abusos de la vida cotidiana en el Chile actual*. Santiago de Chile: Editorial LOM.
- (2013): “La igualdad en el lazo social: procesos sociohistórico y nuevas percepciones de la desigualdad en la sociedad chilena”. En: *DADOS-Revista de Ciências Sociais*, Rio de Janeiro, vol. 56, nº 1, pp.109-132.
- (2016): “La calle y las desigualdades interaccionales”. En: *Serie de Documentos de Trabajo PNUD Desigualdad*, nº 2016/6, septiembre, Santiago de Chile.
- Araujo, Kathya/Martuccelli D. (2012): *Desafíos comunes. Retrato de la sociedad chilena y sus individuos, Tomo I y II*. Santiago de Chile: Editorial LOM.
- Barozet, Emmanuelle (2006): “El valor histórico del pituto: clase media, integración y diferenciación social en Chile”. En: *Revista de Sociología*, Universidad de Chile, nº 20, pp. 69-96.
- Barozet, Emmanuelle/Mac-Clure, O. (2015): “Tolerancia a la desigualdad y justicia social. Una agenda teórica de investigación”. En: Castillo, Mayarí/Maldonado Claudia (eds.): *Desigualdades. Tolerancia, legitimación, y conflicto en las sociedades latinoamericanas*. Santiago de Chile: RIL/Universidad Diego Portales, pp.151-182.
- Engel, Eduardo/Navia, Patricio (2006): *Que gane el más mejor. Mérito y competencia en el Chile de hoy*. Santiago de Chile: Debate.
- Frei, Raimundo (2016): “La economía moral de la desigualdad en Chile: un modelo para armar”. En: *Serie Documentos de Trabajo PNUD Desigualdad*, nº 2016/08, diciembre, Santiago de Chile.
- Geddes, Barbara/Wright, Joseph/Frantz, Erica (2014): “Autocratic Breakdown and Regime Transitions: A New Data Set”. En: *Perspectives on Politics*, Vol. 12, Issue 2, pp. 313-331.
- Matthei, Fernando/Arancibia Clavel, Patricia/Maza Cave, Isabel de la (2003): *Matthei: mi testimonio*. Santiago de Chile: La Tercera Mondadori.
- Rancière, Jaques (2006): *Política, policía, democracia*. Trad. María Emilia Tijoux. Santiago de Chile: Editorial LOM.
- (2012 [1995]): *El desacuerdo. Política y filosofía*. Buenos Aires: Nueva Visión.

AUTORES

| **Dany Jaimovich**, Goethe Universität Frankfurt am Main (jaimovich@econ.uni-frankfurt.de), PhD en Economía, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, www.danyjaimovich.com.

| **Belén González**, Universität Mannheim (belen.gonzalez@uni-mannheim.de) es doctora en Ciencias Políticas por University of Essex e investigadora de postdoctorado en el proyecto “Represión y la Escalada de Violencia” (RATE) con la profesora Sabine Carey financiado por el Consejo de Investigación Europeo (ERC).

| **Jorge Calbucura**, University Ostersund, Suecia (calbucura@mapuche.info) es profesor asociado del Departamento de Trabajo Social Mid Sweden.

| **Nicolás del Valle Orellana**, International Institute for Philosophy and Social Studies (Berlín; ndelvalle@iipss.com), cientista político, magíster en Pensamiento Contemporáneo y candidato a doctor en Filosofía. Director de *Pléyade*, revista de humanidades y ciencias sociales.

| **Claudia Maldonado Graus**, Freie Universität Berlin (cmaldonadograus@gmail.com), doctora en Sociología.